

**PENAL.DELITO IMPAGO PENSIÓN DE ALIMENTOS. HASTA QUE MOMENTO SE PUEDEN PEDIR LA CANTIDAD POR IMPAGO DE PENSIÓN DE ALIMENTOS. ES HASTA EL MOMENTO DEL JUICIO ORAL SIEMPRE QUE SE RECOJAN EN LAS CONCLUSIONES DEFINITIVAS Y EL ACUSADO SE HAYA PODIDO DEFENDER.**

*delimitación del periodo objeto de enjuiciamiento, en concreto qué mensualidades deben conformar el objeto del proceso, **sólo las inicialmente denunciadas o además las posteriores adeudadas**, y en este caso, hasta qué momento procesal serían incluidas*

- *(declaración del investigado,*
- *auto de **incoación** de procedimiento abreviado*
- *, escrito de **acusación** -pública y/o privada-,*
- ***apertura del juicio oral,***
- *celebración del **acto del juicio oral,***
- ***la sentencia o la ejecución de ésta***

**Por tanto, en este tipo de delitos de "tracto sucesivo acumulativo", se puede producir la extensión de los hechos hasta el mismo momento del Juicio Oral, siempre que las acusaciones así lo recojan en sus conclusiones definitivas y el acusado se haya podido defender adecuadamente de tal acusación.**

Condena

- 4 meses de prisión
- Indemnice a su hijo por las pensiones impagadas desde enero 2018 a fecha juicio oral.
- Imposición costas procesales

cronologia

- 7.3.2006 sentencia guarda y custodia.
- 7.5.21 presentación denuncia. Desde 2006 nunca había pagado pensión de alimentos.
- 5.10.21 escrito acusación ministerio fiscal
- 5.1.22 escrito acusación particular

**Sentencia Audiencia Provincial de Valladolid de 9 diciembre 2022 Número Sentencia: 345/2022 Número Recurso: 796/2022 Numroj: SAP VA 1975:2022 Ecli: ES:APVA:2022:1975 Ponente: [ÁNGEL SANTIAGO MARTÍNEZ GARCÍA](#) Procedimiento de origen: PROCEDIMIENTO ABREVIADO 0000123 /2022**

**Cabecera:** Delito de impago de pension de alimentos. Delito de detencion ilegal y secuestro. Delito de malos tratos en el ambito familiar

Sobre esta cuestión en la que se debate el **delito de abandono de familia por impago de pensiones** es preciso tener en cuenta la sentencia del tribunal supremo de 25/06/2020, siendo ponente polo garcía, en la que se analiza este delito desde la perspectiva del

periodo de impagos que pueden ser objeto de enjuiciamiento en la misma causa, la extensión que se puede hacer de los diferentes impagos hasta el momento del juicio oral, y la correlativa extensión de las responsabilidades civiles.

En cuanto a la naturaleza jurídica **delito de impago de pensiones** que tipifica el artículo 227 del cplegislación ciudadacp artículo 227, doctrinalmente, se asimila al delito continuado - repeticiones de acciones u omisiones, diferentes en el tiempo, y con un similar propósito delictivo -, pero la doctrina más destacada lo rechaza por entender que la secuencia temporal ya es exigida por el tipo penal.

PROCESAL: Indefension

**Jurisdicción:** Penal

**Ponente:** [Ángel Santiago Martínez García](#)

**Origen:** Audiencia Provincial de Valladolid

**Fecha:** 09/12/2022

**Tipo resolución:** Sentencia

**Sección:** Cuarta

**Número Sentencia:** 345/2022

**Número Recurso:** 796/2022

**Numroj:** SAP VA 1975:2022

**Ecli:** ES:APVA:2022:1975

## **ENCABEZAMIENTO:**

**AUD.PROVINCIAL SECCION N. 4**

**VALLADOLID**

**SENTENCIA:** 00345/2022

**-C/ ANGUSTIAS N° 21**

**Teléfono:** 983 413275-76

**Correo electrónico:** audiencia.s4.valladolid@justicia.es

**Equipo/usuario:** S45

**Modelo:** 213100

**N.I.G.:** 47186 43 2 2021 0005593

**RP APELACION PROCTO. ABREVIADO 0000796 /2022**

Juzgado procedencia: JDO. DE LO PENAL N. 1 de VALLADOLID

Procedimiento de origen: PROCEDIMIENTO ABREVIADO 0000123 /2022

Delito: IMPAGO DE PENSIONES

Recurrente: Cornelio

Procurador/a: D/D<sup>a</sup> GONZALO FRESNO QUEVEDO

Abogado/a: D/D<sup>a</sup> RAUL CASTRO CABALLERO

Recurrido: MINISTERIO FISCAL, Lina

Procurador/a: D/D<sup>a</sup> , ANA ISABEL BORT MARCOS

Abogado/a: D/D<sup>a</sup> , JESUS MARTINEZ MARTINEZ

### **SENTENCIA**

ILMOS. SR. MAGISTRADOS:

D. JOSE LUIS RUIZ ROMERO

D. ANGEL-SANTIAGO MARTINEZ GARCIA DOÑA MARIA TERESA GONZALEZ CUARTERO

En VALLADOLID, a nueve de diciembre de 2022.

La Audiencia Provincial de esta capital ha visto, en grado de apelación, sin celebración de vista pública, el presente procedimiento penal, dimanante del Juzgado de lo Penal nº 1 de Valladolid, por un delito de abandono de familia por impago de pensiones, seguido contra Cornelio, defendido por el Letrado Don Raúl Castro Caballero y representado por el Procurador Don Gonzalo Fresno Quevedo, siendo partes, como apelante, el citado acusado, y siendo apelados el Ministerio Fiscal y Doña Lina, defendida por el Letrado Don Jesús Martínez Martínez y representada por la Procuradora Doña Ana Isabel Bort Marcos; actuando como Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. DON ANGEL-SANTIAGO MARTÍNEZ GARCÍA.

### **ANTECEDENTES DE HECHO:**

**PRIMERO.** - El Juzgado de lo Penal nº 1 de Valladolid con fecha 28.06.2022 dictó sentencia en el procedimiento de que dimana este recurso declarando probados los siguientes hechos:

"ÚNICO.- Resulta probado y así se declara que por Sentencia de 7 de marzo de 2006 del Juzgado de Instrucción nº 5 de Valladolid dictada en los autos de Procedimiento de Guarda y Custodia nº 12/05 se estableció como pensión de alimentos a favor del hijo del acusado Cornelio la cantidad de 270 euros mensuales, actualizable anualmente conforme al IPC, que debía satisfacer el acusado.

Que el acusado no ha abonado nunca las pensiones alimenticias, habiendo podido hacerlo en los años 2018 y 2019 por tener capacidad económica para ello."

**SEGUNDO.** - La expresada sentencia, en su parte dispositiva dice así:

"Que debo condenar y condeno a Cornelio como autor responsable criminalmente de un delito de abandono de familia, ya definido, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena

- de CUATRO MESES DE PRISIÓN y accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena,
- y que indemnice a su hijo, Higinio, en la persona de su madre en la cantidad que se determine en ejecución de sentencia por las pensiones alimenticias impagadas desde enero de 2018 a la fecha del juicio oral, con sus actualizaciones anuales conforme al IPC, con el interés del art. 576 de la LEC,
- con imposición al mismo del pago de las costas procesales incluidas las de la acusación particular."

**TERCERO.** - Notificada mencionada sentencia, contra la misma se formalizó recurso de apelación por el acusado Cornelio, recurso que fue admitido en ambos efectos y practicadas las diligencias oportunas y previo emplazamiento de las partes, fueron elevadas las actuaciones a este Tribunal y no habiéndose solicitado pruebas en esta segunda instancia, y al estimar que no era necesaria la celebración de la vista para la correcta formación de una convicción fundada, quedaron los autos vistos para sentencia, previa deliberación.

Se aceptan los hechos probados de la resolución recurrida.

#### **FUNDAMENTOS DE DERECHO:**

Se aceptan los Fundamentos de Derecho de la resolución recurrida, en tanto no se opongan a los de la presente resolución.

**PRIMERO.** - En la Sentencia dictada por la Juzgadora de instancia, se condena al acusado Cornelio como autor de un delito de abandono de familia por impago de pensiones, a las penas y demás consecuencias jurídicas que allí se especifican.

Y contra dichos pronunciamientos se alza el recurrente en base a los argumentos que seguidamente pasamos a examinar.

**SEGUNDO.** - Esta Sala considera oportuno, por razones sistemáticas, modificar el orden en el que se ha de dar respuesta a los argumentos esgrimidos en el recurso, y hacer referencia en primer lugar al argumento relativo a la falta de correlación existente entre la sentencia y las acusaciones formuladas, donde se alega la vulneración del principio acusatorio y de contradicción, se alega la incorrecta aplicación del artículo 227.3 del Código Penal, la indebida extensión temporal de los hechos denunciados, la condena por impagos para los que no existió acusación, así como la imposibilidad de hacer frente al pago de las pensiones del año 2020.

Sobre esta materia hemos de observar que la denuncia que dio origen a las presentes actuaciones tuvo lugar en la Comisaría de Policía de DIRECCION000-Valladolid, el día 7 de mayo de 2021, y allí la denunciante indicó que desde la separación de su ex pareja Cornelio, padre de su hijo menor de edad Higinio, que ubica en el año 2005 (aunque formalmente se produjo por Sentencia de 7 de marzo de 2006, en la que se estableció la pensión de alimentos para con el hijo de 270 euros al mes, actualizable), nunca había pagado la pensión.

El Auto de transformación de las Diligencias Previas en Procedimiento Abreviado tuvo lugar el día 28 de septiembre de 2021.

El escrito de acusación del Ministerio Fiscal lleva fecha del día 5 de octubre de 2021, y el escrito de acusación de la acusación particular lleva fecha de 5 de enero de 2022.

En el relato de hechos probados de la Sentencia se concreta el periodo de tiempo al que se refiere la causa, y se indica que "el acusado no ha abonado nunca las pensiones alimenticias, habiendo podido hacerlo en los años 2018 y 2019 por tener capacidad económica para ello", aunque después en el ámbito de la responsabilidad civil, acuerda la extensión del pago de las pensiones alimenticias desde enero de 2018 hasta la fecha del juicio oral, con sus actualizaciones anuales, conforme al IPC.

Sobre esta cuestión en la que se debate el delito de abandono de familia por impago de pensiones es preciso tener en cuenta la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de junio de 2020 (ROJ: STS 2483/2020), siendo Ponente la Exma. Sra. Polo García, en la que se analiza **este delito desde la perspectiva del periodo de impagos que pueden ser objeto de enjuiciamiento en la misma causa**, la extensión que se puede hacer de los diferentes impagos hasta el momento del juicio oral, y la correlativa extensión de las responsabilidades civiles.

La citada Sentencia, en su Fundamento de Derecho Cuarto indica lo siguiente:

*"1. Conforme a la expuesto, la cuestión controvertida es la delimitación del periodo objeto de enjuiciamiento, en concreto qué mensualidades deben conformar el objeto del proceso, sólo las inicialmente denunciadas o además las posteriores adeudadas, y en este caso, hasta qué momento procesal serían incluidas*

- (declaración del investigado,
- auto de incoación de procedimiento abreviado
- , escrito de acusación -pública y/o privada-,
- apertura del juicio oral,
- celebración del acto del juicio oral,
- la sentencia o la ejecución de ésta).

*El delito tipificado en el actual artículo 227 del Código PenalLegislación citadaCP art. 227 vigente, lo que pretende es proteger a los miembros más débiles de la unidad familiar frente al incumplimiento de los deberes asistenciales por el obligado a prestarlos; luego el bien jurídico protegido no es el cumplimiento de una resolución judicial, sino el derecho de asistencia económica a que tienen derecho determinados miembros de una unidad familiar.*

*El referido tipo se refiere a dejar de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos, está recogiendo el mínimo impago constitutivo de delito, que no debe olvidarse, su finalidad es la de proteger a la familia del abandono en las prestaciones económicas, lo que lleva a establecer que se comete el mismo delito si se deja de pagar durante plazos superiores a los allí establecidos, al quedar subsumidos en los posteriores, no cometándose doble delito por dejar de pagar periodos anteriores en los plazos y supuestos previstos por el legislador y ello en cuanto que, la imputación del delito produce el efecto de cierre del periodo que comprende el delito cometido.*

*La Consulta 1/2007, de 22 de febrero, de la Fiscalía General del Estado, argumenta a favor del enjuiciamiento de los impagos producidos hasta el momento del juicio, delito permanente de tracto sucesivo acumulativo, una vez realizados los requisitos típicos (omisión dolosa del pago durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos), sobre los que ineludiblemente ha de ser oído en declaración el imputado en fase de instrucción, los incumplimientos posteriores constituyen elementos adicionales que se integran o acumulan al mismo delito por la realización de idéntica dinámica omisiva. La prolongación en el tiempo de esta conducta tendrá consecuencias en la*

*delimitación de la responsabilidad civil o a la individualización de la pena ( art. 66 CPLegislación citada que se aplica Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal . art. 66 (01/07/2015)), pero no afectan al título de imputación, que se mantiene idéntico. Esta especial naturaleza del delito tipificado en el art. 227 CPLegislación citada CP art. 227, determina que su ámbito temporal se extienda desde el primer incumplimiento hasta la fecha del juicio oral... garantizando plenamente el ejercicio del derecho de defensa del imputado en relación con cada uno de los indicados períodos.*

*2. En cuanto a la naturaleza jurídica del delito de impago de pensiones que tipifica el art 227 del CPLegislación citada CP art. 227, doctrinalmente, se asimila al delito continuado -repeticiones de acciones u omisiones, diferentes en el tiempo, y con un similar propósito delictivo-, pero la doctrina más destacada lo rechaza por entender que la secuencia temporal ya es exigida por el tipo penal. Por tanto, estamos ante lo que se ha dado en llamar un **delito de tracto sucesivo acumulativo**, tal y como lo apuntábamos en nuestra Sentencia nº 187/2009 de 3 de marzo Jurisprudencia citada a favor STS , Sala de lo Penal , Sección: 1ª, 03/03/2009 (rec. 10799/2008 ) El delito de impago de pensiones es de tracto sucesivo., donde distinguíamos entre "los delitos de tracto sucesivo o continuado integrados por varios actos (impago de pensiones), los de ejecución permanente (detención ilegal, tenencia ilícita de armas, etc.) y los de hábito como el maltrato familiar habitual.", y en nuestro auto de fecha 4 de mayo de 2013 afirmábamos que el delito de impago de pensiones del art. 227 del Código Penal Legislación citada CP art. 227 es un "delito en varios actos", reiteración de omisiones en los momentos puntuales en que debe realizarse la prestación, por lo que estaríamos hablando, tal y como hemos apuntado, de un delito de los que se han dado en llamar de tracto sucesivo, en tanto en cuanto para su comisión exige una pluralidad de omisiones, y que no es sino consecuencia del incumplimiento de una obligación de tracto sucesivo, cual es la de girar, con la periodicidad y en los tiempos marcados, los pagos correspondientes.*

*Naturaleza jurídica de ilícito analizado que nos lleva a la conclusión de que **pueden ser objeto del proceso no sólo las mensualidades inicialmente denunciadas sino también las posteriores adeudadas.***

**Ahora bien, fijado el objeto del proceso en el citado sentido, es preciso determinar hasta qué momento procesal serían incluidas las mensualidades impagadas.** La sentencia de instancia revoca el criterio de la sentencia dictada por el Juzgado Penal nº 9 de Barcelona, en la que se acordaba que la acusada debía abonar las pensiones impagadas desde noviembre del 2015 hasta junio del 2018 (**fecha del juicio oral**), mientras que la Audiencia Provincial entiende que la responsabilidad civil solo puede abarcar el periodo comprendido entre **noviembre de 2015 a julio de 2016, que constituye el objeto de la reclamación de la denuncia inicialmente interpuesta.**



*El recurso debe ser estimado. Como hemos dicho, la acción penal se ejercita sobre los mismos hechos cuando, a los iniciales impagos de pensiones que motivaron la presentación de una denuncia, siguen sin solución de continuidad una multitud de omisiones idénticas.*

**El periodo objeto de enjuiciamiento debe comprender hasta el momento procesal del acto del juicio oral**, ya que ningún menoscabo a la defensa del acusado puede ocasionar el hecho de que todos los impagos ocurridos hasta ese momento se incorporen a la pretensión acusatoria planteada tras la práctica de las pruebas en el juicio oral, pues en tales casos el acusado pudo perfectamente defenderse de esa imputación.

La STS 302/2000, de 11 de diciembre, señalaba que "Si bien constituye garantía del principio acusatorio que el hecho objeto de acusación y fallo permanezca inalterable, ello no significa que no sea posible introducir a lo largo del proceso modificación alguna de cualesquiera circunstancias fácticas relativas a los hechos objeto de enjuiciamiento. En efecto, resulta posible la modificación no esencial de los hechos imputados desde que comienza la instrucción hasta que se fija definitivamente la acusación en los escritos de calificación o acusación definitivas (por todas SSTC 20/1987, de 19 de febrero, FJ 5Jurisprudencia citadaSTC, Sala Primera, 19-02-1987 ( STC 20/1987 ); 41/1998, de 24 de febrero, FJ 22Jurisprudencia citada a favorSTC, Sala Primera, 24 /02/1998 ( STC 41/1998)Posibilidad de modificar no esencialmente los hechos objeto de imputación sin que se vulnere el principio acusatorio.; 181/1998, de 21 de julio, FJ 3).

Por otro lado, el Auto del Tribunal Constitucional nº 252/2002, de 5 de diciembre de 2002Jurisprudencia citadaATC, Sala Primera, 05-12-2002 (ATC 252/2002), que a su vez cita la STC 278/2000, de 27 de noviembreJurisprudencia citada a favorSTC, Sala Segunda, 27/11/2000 ( STC 278/2000 )El escrito de conclusiones definitivas define los hechos objeto de acusación a efectos del principio acusatorio., establece que "en el procedimiento abreviado **es el escrito de conclusiones definitivas** de la acusación el instrumento procesal que ha de considerarse esencial a los efectos de la fijación de la acusación en el proceso".

**Por tanto, en este tipo de delitos de "tracto sucesivo acumulativo", se puede producir la extensión de los hechos hasta el mismo momento del Juicio Oral, siempre que las acusaciones así lo recojan en sus conclusiones definitivas y el acusado se haya podido defender adecuadamente de tal acusación.**

En aplicación de esta tesis al supuesto concreto de autos, el límite temporal de los hechos a enjuiciar se contendría en dicho escrito de conclusiones y modificado el mismo en el acto del juicio, **no cabe entender que se produzca indefensión**, ya que conforme a la configuración de este tipo penal la acreditación de la falta de posibilidades para el abono compete al imputado y no consta que solicitase -ex art 788.4 de la L.E. CriminalLegislación citada que se aplicaReal Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal. art. 788 (04/05/2010)- la suspensión ante la modificación de la calificación.



*3. En conclusión, las omisiones periódicas que integran el tipo penal dan lugar a un delito de tracto sucesivo acumulativo, en el que, una vez superado ese tiempo mínimo sin abonar la pensión, los sucesivos impagos se acumulan a él sin relevancia penal a efectos de continuidad delictiva, pues, en su definición, esos plazos de incumplimiento son los mínimos y nada impide que por encima de ellos pueda haber unos mayores, que quedarían acumulados a los anteriores, hasta el momento en que se celebre el juicio oral.*

*Lo anterior no implica indefensión, además, de ello deriva un obvio beneficio para la denunciante, al no tener el primero que iniciar sucesivas denuncias frente al incumplimiento, evitando la posible situación de desamparo de los verdaderos perjudicados que son los hijos menores, y en cuanto a la aquí acusada, a diferencia de lo apuntado por la misma, sin duda ello le ha producido un obvio beneficio penológico".*

**Visualizado el acto del Juicio Oral, se comprueba que ninguna de las acusaciones solicitó en el acto del juicio oral la extensión del objeto de enjuiciamiento hasta el momento del juicio oral,** por lo que el objeto de enjuiciamiento ha de quedar circunscrito a lo siguiente:

desde que se dictó la Sentencia en el Procedimiento de Guardia y Custodia nº 12/2005, de fecha 7 de marzo de 2006, y hasta el dictado del auto de transformación de las Diligencias Previas en Procedimiento Abreviado, que tuvo lugar el día 28 de septiembre de 2021, donde se incluyen los impagos de las pensiones correspondientes a los años 2018 y 2019 (únicas por las que se le condena al acusado).

Como consecuencia de lo indicado, y dado que en la Sentencia de instancia no se aprecia que haya habido impago de pensiones susceptibles de ser considerados delito en el año 2020, ni en el año 2021 hasta el dictado del Auto de Transformación, es decir, el día 28/09/2021, la responsabilidad civil no puede extenderse a esos otros periodos de tiempo, dado que se trata de la responsabilidad civil derivada del delito, y debe existir correlación entre los hechos por los que se le condena al acusado y las responsabilidades civiles derivadas del delito que se declaran en la Sentencia.

En estos aspectos sí ha de ser estimado el recurso.

**TERCERO.** - Se alega en el recurso la aplicación indebida del artículo 227.1 del Código Penal por incorrecta aplicación del tipo penal, error en la valoración de la prueba, existencia de error manifiesto y claro por examen insuficiente de la prueba, inexistencia de dolo, insuficiente motivación de la sentencia, vulneración de la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva.

En todos estos argumentos, en realidad la argumentación es la misma. La defensa del acusado considera que no se ha acreditado que el acusado tuviera suficientes ingresos para hacer efectivos los pagos de la pensión alimenticia, que además de fijarse en los ingresos (que es lo que se hace en la Sentencia de instancia), se debería de atender también

a los saldos bancarios, en los que se aprecia que el acusado carece de dinero, en la circunstancia de que tampoco es titular de ningún inmueble, que en consecuencia se encuentra en una situación de imposibilidad de cumplimiento de la obligación de pagar los alimentos, al no haber tenido capacidad económica suficiente como para poder hacer frente al citado, y en consecuencia no ha existido dolo en su conducta, considerando de todo ello que se ha vulnerado el principio de presunción de inocencia.

Hemos de indicar a este respecto que el delito de abandono de familia en su modalidad de impago de prestaciones económicas establecidas en convenio o resolución judicial, previsto y penado en el Art. 227.1 del Código Penal, requiere la conciencia y voluntad por parte del sujeto activo de la realización del injusto penal típico, que comporta, como consecuencia, la voluntad de poner en peligro el bien jurídico de la seguridad económica del cónyuge o de los hijos y la no concurrencia de elementos que excluyan esta culpabilidad. En el caso de que no concurra el citado elemento subjetivo, nos hallaremos ante la falta de uno de los elementos del tipo.

Es necesario poner de manifiesto que este delito, al consumarse mediante un comportamiento de simple omisión constituido por el incumplimiento de la obligación pecuniaria durante los plazos que el artículo citado del Código Penal establece, esa conciencia y voluntad del obrar doloso a la que nos hemos referido, no puede alcanzarse sino por referencia a la obligación que pesa sobre el sujeto de realizar la futura acción debida y que no llega a realizar de forma que cualesquiera cuestiones que se susciten sobre la imposibilidad de su cumplimiento por carecer de recursos para realizar el pago o por la concurrencia de un estado de necesidad no intencionado y que darían lugar a una causa de exención de la responsabilidad penal, deben ser fehacientemente probadas por quien las invoca.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de junio de 2020 (ROJ: STS 2483/2020), nos recuerda que, *"conforme a la configuración de este tipo penal, la acreditación de la falta de posibilidades para el abono competente al imputado"*.

En nuestro caso aparece que desde el mismo momento en el que se dictó la Sentencia por la que se acordó la obligación de pagar la pensión, el 7 de marzo de 2006, el acusado ha reconocido que no ha pagado nunca, y si bien es cierto que ha estado en prisión en ciertos periodos de tiempo entre los años 2008 y 2010, y después en el año 2015, y que al parecer tiene otra familia en la que ha tenido otros tres hijos, lo cierto es que lo que aparece en la causa es que el acusado se ha desentendido de su primer hijo, y que concretamente en los años 2018 y 2019 (únicos por los que se le condena), el acusado sí tuvo ingresos, habiendo reconocido que en año 2018 ganó unos 900 euros al mes, y en el año 2019 unos 800 euros al mes, y podría al menos haber contribuido de alguna manera, aunque sólo hubiera sido en parte, al sustento del primer hijo del que aparece se ha desentendido completamente, lo cual sí constituye el delito por el que ha sido condenado.

EL que no tenga saldos en las cuentas ni aparezca como titular de bien inmueble alguno, no significa que tal circunstancia le exima de sus obligaciones del pago de la pensión, si en realidad sí ha obtenido alguno tipo de ingresos, como es el caso.

Por lo tanto, estos argumentos del recurso no pueden ser acogidos.

**CUARTO.** - Por último, se alega el error en la valoración de la prueba, invocando el desconocimiento del número de la cuenta corriente en el que hacer los ingresos.

Tal alegación carece de consistencia. Cuando alguien tiene voluntad de pagar no tiene más que interesarse a través de las representaciones procesales (abogado o procurador) o a través del Juzgado del número de la cuenta en la que tiene que efectuar los ingresos, o en su caso se puede proceder a la consignación, que sirve como forma de pago tal y como se previene en los artículos 1.176 y siguientes del Código Civil.

**QUINTO.** - Por todo ello, el recurso de apelación interpuesto por el acusado ha de ser parcialmente estimado, en los términos que han sido expuestos en la presente resolución.

**SEXTO.** - En atención a lo expuesto, y de acuerdo con los artículos 239 y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, teniendo en cuenta que el recurso de apelación es parcialmente estimado, es procedente declarar de oficio las costas de esta alzada.

#### **FALLO:**

Que **estimando parcialmente** el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Cornelio, contra la sentencia dictada en la presente causa, se revoca parcialmente mencionada resolución en el único sentido de que en concepto de responsabilidad civil, el acusado ha de indemnizar a su hijo Higinio, en la persona de su madre, en la cantidad que se determine en ejecución de sentencia por las pensiones alimenticias impagadas en los años 2018 y 2019, con sus actualizaciones anuales conforme al IPC, con los intereses legales contemplados en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil desde el dictado de la presente resolución, manteniendo y confirmando el resto de los pronunciamientos de la resolución recurrida.

Se declaran de oficio las costas de esta alzada.

Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber que conforme al art. 847.1.2º b) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, contra la misma pueden interponer Recurso de Casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, por infracción de Ley del motivo previsto en el número 1º del art. 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el plazo de CINCO DÍAS, a contar desde la última notificación.

Y una vez que sea firme, remítase la presente resolución al Juzgado de procedencia, quien deberá acusar recibo y reportado que sea, archívese este rollo, previa nota.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos

El presente texto proviene del Centro de Documentación del Poder Judicial. Su contenido se corresponde íntegramente con el del CENDOJ.